



México o la cultura de la desconfianza

por Lorenzo Meyer

Un problema obvio de la próxima elección presidencial es la falta de credibilidad, y no sólo del proceso electoral mismo, sino también de los partidos, sus programas y candidatos.

En una sociedad como la mexicana, la cultura política dominante tiene, en su centro, un duro núcleo de incredulidad. Una historia centenaria de engaños, corrupción y manipulación desvergonzada, ha hecho que la incredulidad y cinismo del mexicano promedio tenga la dureza del palo-fierro. En una encuesta nacional de 1987 del Banco Nacional de México, dirigida por Enrique Alduncin, aparece una lista de 29 ocupaciones ordenadas según el grado de confianza que le merecieron a una muestra de ciudadanos; el lugar que ocupa el presidente de la República no es el primero sino el 15º, y los "líderes políticos" se salvaron de quedar en el último sitio únicamente porque la lista incluía a la policía, y en la estima y confianza de los mexicanos no se puede caer más bajo que un policía.¹

¹Alduncin Abitia, Enrique. *Los valores de los mexicanos. T.II. México en tiempos de cambio*, Fondo Cultural Banamex, México, 1991, p. 156.

Lorenzo Meyer. Historiador. Entre sus últimos libros,
La segunda muerte de la Revolución Mexicana.

La desconfianza del ciudadano frente a los líderes políticos y el poder no es reciente ni gratuita. Salvo honrosas excepciones individuales, las élites dirigentes mexicanas han defraudado sistemáticamente la confianza de sus seguidores debido, entre otras cosas, a su incapacidad para mantener un grado razonable de congruencia entre su propuesta política y sus acciones reales. Y esto es tan válido para juzgar la acción de los líderes criollos de la Independencia como a los populistas del auge petrolero de 170 años después. En el actual proyecto neoliberal son ya evidentes ciertas incongruencias importantes entre sus postulados teóricos y políticos y la realidad, en particular en el caso de la bondad del mercado como distribuidor de premios y castigos, la solidaridad social y la democracia política.

El ser objeto de la desconfianza no es un monopolio del partido del Estado —el PRI—, también afecta a la oposición, aunque de manera y con intensidad diferentes. Una de las pocas ventajas de la oposición mexicana, por no decir que la única, es que merced al monopolio político que por más de seis decenios ha ejercido el PRI, los postulados y proyectos políticos opositoristas han permanecido básicamente en el reino de las ideas, y se han confrontado poco con la realidad. Esto es más cierto para el PRD que para el PAN, pues hoy las tres gubernaturas panistas y 97 presidencias municipales, permiten empezar a medir la consistencia de los principios teóricos del partido blanquiazul y su acción como un organismo con responsabilidad de poder real. En contraste, el PRD, y salvo por un puñado de municipios marginales, se mantiene como una organización fuera del poder, y por tanto, sus propuestas sólo pueden ser evaluadas en función de su coherencia y lógica internas.

La lucha franca, abierta, del PRD y su antecesor, el FDN, contra el presidencialismo autoritario y la antidemocracia, le dio tal credibilidad a su liderazgo, que muy posiblemente fue Cuauhtémoc Cárdenas quien ganó las elecciones de 1988. Sin embargo, mucha agua ha pasado desde entonces bajo el puente, y hoy el problema central del PRD con relación a la credibilidad, es que frente al programa y acción del neoliberalismo en el poder —disminución de la inflación, apertura económica, integración al gran mercado norteamericano, captación masiva del capital externo, programa de Solidaridad, etc.— la propuesta económica perredista sigue sin lograr la concreción suficiente para ganar la confianza de los empresarios o para despertar la imaginación y el entusiasmo de hace cinco años entre una buena parte de la masa trabajadora sobre cuyos hombros el neoliberalismo echó la pesada carga del enorme costo del cambio de modelo económico.

La Corriente Democrática que surgió dentro del PRI en 1986 y que, en unión del extinto Partido Mexicano Socialista, dio finalmente forma al actual PRD, se propuso, entre otras cosas, definir una política económica alternativa al neoliberalismo. Sin embargo, la crisis mundial del Estado asistencial y la autodestrucción del "socialismo real", le han afectado al punto de no poder hacer una oferta económica tan clara, atractiva y concreta como su oferta política: la lucha contra el autoritarismo presidencial y la enorme corrupción



que éste ha generado en el aparato del Estado. Una parte del electorado mexicano desearía una propuesta del PRD, que ofreciera una distribución más equitativa y justa de la riqueza, pero que mantuviera los elementos realistas y positivos del nuevo modelo económico neoliberal, que los tiene. Mientras no se logre esto, la desconfianza sembrada por los enemigos del cardenismo en la opinión pública —le acusan de pretender un retorno al estatismo y al populismo irresponsable— seguirá encontrando terreno fértil.

El PAN, como partido de clase media, no tiene mayor problema con su proyecto económico, pues considera, y no sin razón, que el paradigma neoliberal hoy triunfante es casi compatible con su tradicional antiestatismo y preferencia por el mercado. Para el PAN el problema de credibilidad está en el área estrictamente política. La bandera histórica del PAN es su lucha por transformar un sistema autoritario, de partido de Estado, en una auténtica democracia liberal. Sin embargo, a partir del momento en que el gobierno de Carlos Salinas y su partido, el PRI, asumieron abiertamente en 1989 la tarea de reconstruir la economía mexicana en función del mercado internacional, el liderazgo panista dejó de verlos como sus enemigos históricos fundamentales. Y es lógico; en la medida en que la energía de ese autoritarismo presidencial se transformó en el motor del largamente demandado cambio en la naturaleza del sistema económico, la perspectiva del PAN cambió. Y ese cambio llevó a identificar al PRD y no al PRI como al adversario fundamental. A cambio de un apoyo condicionado al neoliberalismo autoritario de Carlos Salinas —apoyo altamente valorado por un gobierno con un gran déficit de legitimidad democrática— el PAN recuperó en 1991 el carácter de segunda fuerza electoral que perdiera en 1988 a manos del cardenismo. Además, el presidencialismo autoritario le reconoció al PAN algunos de sus triunfos locales y le permitió empezar a ser corresponsable de gobiernos regio-

nales —las gubernaturas de Baja California, Guanajuato y Chihuahua, más municipalidades tan importantes como las de Tijuana, Ciudad Juárez, León, Celaya y Mérida.

La oposición-negociación con la presidencia autoritaria, ha producido ganancias para los herederos de Gómez Morín, pero no sin un costo: pérdida relativa de credibilidad. El apoyo de la bancada del PAN en el Congreso a las dos reformas electorales imperfectas (por parciales hacia el PRI) de Carlos Salinas, no cuadró con la intransigencia democrática del PAN original, pero en cambio le abrió a ese partido las puertas de Los Pinos para exigir el reconocimiento de algunas victorias —no todas— en las urnas y modificaciones constitucionales. Un ejemplo conspicuo reciente de esto último, se dio cuando la presidencia forzó a la bancada priísta a pasar la reforma del artículo 82 en los términos exigidos por el líder legislativo panista. El último ejemplo de la negociación electoral —cuyo desenlace se desconocía al escribir estas líneas— se dio en el conflicto posterior a la elección estatal de Yucatán el 28 de noviembre. Por un lado, el PRI recurrió a los fraudes usuales para recuperar el control del estado.² Sin embargo, por el otro, y según informes de prensa, la Secretaría de Gobernación presionó al PRI yucateco para que éste aceptara una derrota en Mérida en favor del PAN, a fin de no terminar con la conveniente relación de oposición-negociación.³ Son situaciones como las anteriores, las que han disminuido la credibilidad del PAN como un partido con un compromiso democrático auténtico.

Vamos ahora al caso del PRI, el partido de Estado. Este partido, su programa y sus candidatos son los que tienen el problema de credibilidad más profundo. Desde hace mucho los priístas han vencido, pero casi nunca han convencido. Como responsables casi únicos del poder desde 1929, el discurso de los priístas ha contrastado sistemática y notablemente con la realidad que han moldeado por varias generaciones y de la cual ellos son los responsables principales. Un ejemplo de este contraste entre la oferta priísta y la realidad, se encuentra precisamente en el discurso de toma de protesta como candidato presidencial del partido de Estado de Luis Donald Colosio el 8 de diciembre. Ahí, el exsecretario de SEDESOL propuso al país una serie de compromisos estratégicos que no avala la realidad creada por el largo monopolio del poder del PRI. El primero fue la garantía de la soberanía

frente al exterior. Como propuesta es simplemente la oferta de cumplir una obligación, pero el candidato ni definió soberanía ni dijo cómo preservarla en una situación en que la integración a Estados Unidos, propiciada por su partido, ha llevado, por ejemplo, o dejado en manos de organismos supranacionales temas de jurisdicción interna como son la vigilancia del cumplimiento de la legislación nacional en materia laboral y ecológica (acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio).

El segundo compromiso formulado por el candidato priísta es, de nuevo, cumplir con la ley: sostener la democracia. ¿Pero cómo tomarlo en serio cuando se hace precisamente a la sombra del antidemocrático y público “dedazo” presidencial que colocó a Luis Donald Colosio como candidato del PRI? La afirmación de “el PRI no necesita ni yo quiero un solo voto al margen de la ley” se hizo teniendo como trasfondo una historia sistemática de fraudes, que se inician desde 1929, y justo cuando en el extremo sur del país, en Yucatán, se desarrollaba una crisis política precisamente porque se sospecha que, una vez más, el PRI había obtenido no uno, sino varios miles de votos al margen de la ley. Finalmente, cuando el señor Colosio estuvo al frente del PRI, no faltaron ejemplos de elecciones increíbles ganadas por su partido gracias a que es un partido de Estado.

El tercer compromiso del candidato priísta fue la generación de empleo. Pues bien, este compromiso se adquiere precisamente cuando la política económica del gabinete del que el candidato Colosio formaba parte, ha llevado a una sustantiva desaparición de empleos. En efecto, al final de 1993 se calculó que por cada nueva empresa que se creaba, tres se cerraban. El cuarto compromiso se refirió al desarrollo de las regiones y el respeto al federalismo, pero esa afirmación contrastaba con la existencia de 16 gobiernos estatales cuyos ejecutivos no han sido electos sino designados —impuestos—, por el poder central, precisamente por ese poder que acababa de imponer también al señor Colosio dentro de su partido como preludeo a elecciones donde el partido de Estado lleva las de ganar por jugar con dados cargados.

El quinto compromiso del exsecretario de Desarrollo Social fue combatir la pobreza. Este es, en sí mismo, un buen compromiso, sin duda, ya que según las cifras del INEGI hay 13.6 millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema. Pero la firmeza del compromiso se hace dudosa cuando se le contrasta con la realidad. Según otras cifras del INEGI, las de la distribución de la riqueza en 1992, resulta que hoy, bajo el gobierno del cual el señor Colosio fue pieza clave, los ricos son más ricos que nunca, pues el 20% de las familias más afortunadas concentran actualmente ¡el 54% del ingreso disponible!, es decir, 5.7 puntos porcentuales más que en 1984, el año anterior a que empezara el neoliberalismo en serio. Es frente a esta extrema concentración de la riqueza que el programa de Solidaridad, del que el señor Colosio fue responsable y del que tanto se ufana, adquiere su verdadera dimensión. El sexto compromiso es con la educación. Un compromiso muy necesario, pues tras 64 años de gobiernos priístas y en vísperas de integrarnos con Estados Unidos, el

²Sobre el particular, consúltese el artículo de Miguel Angel Ferrer en *El Universal* (6 de diciembre, 1993).

³Véase al respecto la reconstrucción, en *El Financiero* (11 de diciembre), de un diálogo en la noche del 1º de diciembre de 1993 entre el secretario de Gobernación y la gobernadora interina de Yucatán. De acuerdo con esa información, la Secretaría de Gobernación quería ceder la presidencia municipal de Mérida al PAN para mantener la alianza política con ese partido, pero encontró la inesperada oposición de la gobernadora, que sostuvo el derecho del PRI local a sostener su victoria total.

36.2% de los mexicanos mayores de 15 años no cursó o no completó su educación primaria (cifras de 1990).

El séptimo compromiso del candidato del PRI es lograr un nuevo equilibrio en la vida de la República mediante una reforma del gobierno. Este compromiso ni siquiera debió de haberse hecho, pues es una admisión tácita de que los mexicanos aún no vivimos tal y como la Constitución lo pide: sin un partido de Estado como es el PRI y con una real división de poderes, única forma de lograr un verdadero equilibrio de poderes, tal y como Montesquieu lo demostrara desde el siglo XVIII.

En conclusión, el camino de México hacia una vida cívica dominada por la credibilidad y la confianza, promete ser largo y arduo. Y es más que dudoso que de aquí a agosto de 1994 los mexicanos lo podamos recorrer a cabalidad. **n**